



POSICIÓN DEL INEGI RESPECTO A LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA

Mucho se ha dicho y escrito sobre la posición del INEGI respecto a la información sobre seguridad pública; en esta comunicación deseamos presentar nuestros puntos de vista.

Lo primero, señalar que a partir de la autonomía del INEGI a finales del 2008, la Junta de Gobierno INEGI estableció como una de sus áreas prioritarias la producción de información sobre seguridad pública y justicia. Con este objetivo creó el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, de manera similar a como se tiene en materia demográfica y social, en materia económica y en materia de información geográfica.

Con la creación de este subsistema, se establecieron cuatro comités técnicos especializados en los que participan instituciones de los tres órdenes de gobierno y de los poderes ejecutivo y judicial, responsables de la generación de información estadística. Se está trabajando de manera conjunta como nunca antes para poner al día la información en estos temas.

En este contexto, el INEGI ha destinado recursos humanos y financieros a importantes proyectos en esta materia habiendo realizado por primera vez Encuestas Municipales y Estatales, que son en realidad censos porque captamos información de todos los municipios y las entidades federativas, con módulos específicos sobre seguridad pública. De igual manera iniciamos la publicación a finales del año pasado de la Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública con periodicidad mensual, sin precedentes en la historia estadística del país, y que sigue una metodología similar a las encuestas sobre confianza del consumidor y del productor que se levantan en México y los países más desarrollados en materia estadística.

En el 2011 llevaremos a cabo encuestas (censos) sobre Procuración e Impartición de Justicia a nivel Federal y Estatal. Un objetivo para este año que comienza es también publicar mensualmente las estadísticas judiciales en materia penal, las cuales se realizan gracias a la valiosa colaboración del personal adscrito a los juzgados de primera instancia en materia penal del país y que hoy sólo se publican anualmente. Con ello buscamos dar a esta información la oportunidad que debió haber tenido desde hace mucho tiempo.

Como parte del Subsistema de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, estamos trabajando con diversas instituciones federales y estatales y estancias coordinadoras, como es el caso de las conferencias de Procuradores Generales de Justicia, de Tribunales Superiores de Justicia, la misma CONAGO o las asociaciones de gobiernos municipales, la definición de una clasificación o catálogo de delitos que permita comparar sobre las mismas bases la información que se capta en las entidades federativas y que se registra con diferentes criterios dependiendo de los códigos penales de cada entidad federativa. De igual manera, promoveremos la adopción, en los registros administrativos relacionados con la seguridad pública, de la norma técnica sobre



domicilios geográficos que publicó el INEGI en el diario oficial de la federación el 12 de noviembre del año pasado, de forma tal que se puedan generar mapas delictivos continuos a partir de estos registros. Un objetivo de mediano plazo es asegurar que cada expediente tenga un número de folio único de tal forma que se le pueda dar seguimiento en todo el proceso, tal como hoy en día ya se realiza en el ámbito del Poder Judicial de la Federación.

De manera complementaria a lo anterior, queremos perfeccionar las encuestas que realizamos para captar la victimización y la percepción ciudadana sobre la seguridad pública y el desempeño de las instituciones responsables en esta materia. En este espíritu, el INEGI ha llegado a un acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de capacidades estadísticas, analíticas y de monitoreo en temas de seguridad, victimización, justicia y Estado de Derecho; en particular el desarrollo de encuestas de victimización, percepción y medición del desempeño en seguridad pública y justicia. Dicho acuerdo reforzará los trabajos del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia y fomentará la colaboración regional e internacional en la materia con el apoyo de expertos de la UNODC. Lo anterior sin menoscabo de otros esfuerzos que se lleven a cabo en instituciones públicas, privadas o de la sociedad civil.

Sabemos que modernizar las estadísticas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia va a tomar tiempo, va a implicar recursos y un gran compromiso de todas las instituciones del Estado generadoras de información, pero en la Junta de Gobierno del INEGI tenemos clara la necesidad de poner al día las estadísticas en estas materias.

En este contexto, el INEGI recibió la solicitud del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de hacerse cargo de los indicadores de percepción, victimización y desempeño institucional.

El INEGI aceptó la solicitud por tres razones fundamentalmente: primero, porque es su obligación; el INEGI fue creado para eso, tiene un mandato legal para producir información de interés nacional para el diseño y evaluación de políticas públicas; segundo, porque es la única institución del país con la capacidad de despliegue nacional para conducir este tipo de operativos de manera homogénea; y tercero, porque es prioridad del Instituto a partir de su autonomía, como ya se mencionó, generar información sobre seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

Lo anterior está en línea con la solicitud de la Organización de las Naciones Unidas que expresamente promueve la participación de las oficinas nacionales de estadística en lo que respecta a las estadísticas del delito y la aplicación de encuestas victimológicas. (Nota del Secretario General de ONU A/CN.3/2010/19).

La realización de la ENSI - 7 ha estado sujeta a diversas críticas y apreciaciones sobre las cuales queremos compartir nuestra opinión. Desafortunadamente no se solicitó al INEGI de manera previa aclaración alguna sobre las críticas y apreciaciones de los resultados de la encuesta, que



hubiera permitido aclarar oportunamente los cuestionamientos expresados. Sobre los mismos queremos observar lo siguiente:

- 1.- No sin dificultades, pero el ICESI participó directa y activamente en el diseño del cuestionario y existen minutas sobre estos trabajos.
- 2.- Durante el desarrollo de las discusiones del cuestionario, el ICESI se opuso a que se hicieran modificaciones a la parte de victimización de la encuesta, lo que fue aceptado por el INEGI aun considerando importante realizar modificaciones a esta parte que mejorarían la calidad de la encuesta.
- 3.- En las partes de percepción y de evaluación del desempeño se hicieron modificaciones y adiciones conforme a las recomendaciones del Manual de Encuestas de Victimización de Naciones Unidas, específicamente en su capítulo II, planeación de una encuesta de victimización con aspectos como considerar las necesidades y prioridades de los usuarios y actores relevantes. Capítulo IV conteo de delitos y víctimas, para preguntas de seguimiento a las víctimas y actitudes generales hacia la policía y al sistema de justicia criminal, así como a los objetivos adicionales de la ENSI -7 que tenían que ver con generar información para el diseño de políticas públicas y la evaluación del desempeño de las autoridades.
- 4.- En relación con la estructura del cuestionario para esta encuesta es importante referir, en atención de su mandato constitucional de producir información de interés nacional para conocer fenómenos sociales y económicos, que sea puesta a disposición de todo el público y que sirva para formular y evaluar políticas públicas, el INEGI consulta las necesidades de información de los principales usuarios en sus proyectos. Por ello, para el caso de la ENSI - 7 fueron consultados expertos de diversas instituciones del Gobierno Federal y de Gobiernos Estatales. Sin embargo, no es automática la inclusión o definición de un reactivo que alguna institución o autoridad proponga; no se incluyen preguntas “cómodas” o “al gusto” de las autoridades, sino que existe un proceso técnico y metodológico para convertir una necesidad o conjunto de necesidades de información en reactivos de una encuesta con el fin de obtener información objetiva, clara y valiosa para los usuarios que hacen políticas y para aquellos que monitorean u observan el quehacer de estas instituciones. El ICESI participó de manera permanente en la revisión del cuestionario y aceptó las propuestas de INEGI de incluir nuevos reactivos y de mejorar otros existentes en los apartados de percepción y desempeño institucional, tal como se muestra en las minutas de trabajo respectivas.
- 5.- De esta forma, en la ENSI – 7 se incluyeron nuevas preguntas relativas a capturar la percepción social sobre las políticas y programas de seguridad pública en los tres ámbitos de gobierno, sobre si las autoridades proveen de información de manera preventiva a los ciudadanos, sobre el interés mostrado por las autoridades para mejorar la seguridad pública, sobre la disposición a ayudar de esas autoridades, también se preguntó sobre la percepción del desempeño mostrado por once diferentes tipos de autoridades relacionadas con la seguridad pública, y sobre las acciones que la ciudadanía percibe que se hayan realizado en su comunidad o las que pudieran faltar por hacer para mejorar su seguridad, entre otras preguntas y conjuntos de

información. Todas ellas, de indudable utilidad para conocer la situación nacional del fenómeno analizado y, de nueva cuenta, para que las instancias responsables de hacer políticas y programas públicos, o bien de monitorear estas materias, tengan mayores elementos de análisis a partir de esta encuesta.

- 6.- Con estas adiciones, el total de reactivos de la ENSI – 7 fue de 178 que comparado con las prácticas internacionales como sería el caso del British Crime Survey una de las encuestas más acreditadas que contiene 961 reactivos, es todavía una encuesta con un número de preguntas abajo del estándar internacional.
- 7.- El ICESI participó en la capacitación y, como lo habían solicitado, también en la supervisión. Tenemos reportes de lo observado por personal del ICESI donde consta el trabajo que realizaron de acompañamiento de campo por tres días. A este personal del ICESI que estaba plenamente capacitado e inmerso en el proyecto nunca se le impidió continuar con la supervisión; podrían participar cuántas veces lo consideraran necesario.
- 8.- En efecto, una vez que el operativo se encontraba a más de la mitad de su avance, el ICESI pidió incorporar a un nuevo grupo de supervisores que no había sido solicitado previamente, lo que el INEGI no pudo aceptar ya que no habían participado en la capacitación conjunta y porque se consideró que añadirlos sin planeación previa podría perjudicar el operativo dado que el tema es de alta sensibilidad para la población entrevistada.
- 9.- Independientemente de lo anterior, debe señalarse que el INEGI realiza un proceso de supervisión de todas sus encuestas conforme a la metodología más avanzada y a los requerimientos particulares de cada encuesta. Conforme a estos parámetros, el INEGI realizó la supervisión de la ENSI – 3 y la ENSI – 6 sin que hubiera ninguna objeción por parte del ICESI de este procedimiento.
- 10.- Respecto al reporte de los incidentes encontrados durante el levantamiento, se remitió al ICESI el 11 de agosto del 2010 el informe de avance correspondiente a la primer semana de levantamiento. Se llevó a cabo una reunión el 2 de septiembre con personal del ICESI para darle a conocer la información que en ese momento se tenía respecto de las áreas inseguras detectadas previo y durante el levantamiento de la información, y el 7 de septiembre se remitió el informe a la quinta semana de levantamiento. Los resultados del levantamiento se encuentran en la página del INEGI como parte del Informe operativo y como anexo a la síntesis metodológica.
- 11.- Los resultados de la ENSI estuvieron comprometidos desde la celebración del contrato de prestación de servicios entre el INEGI y el Consejo Nacional de Seguridad Pública para el 19 de noviembre, dado el retraso para iniciar el período de levantamiento. No obstante lo anterior, por solicitud del Consejo y del ICESI, la entrega de los mismos se adelantó para el día 14 de noviembre. Asimismo, el INEGI puso a disposición del público la base de datos con las respuestas de todos y cada uno de los reactivos en su página de internet. En ningún momento se omitió la publicación de reactivos como se ha señalado en algún cuestionamiento.

La crítica más extensa de los resultados de la ENSI 7 se dieron en un artículo de Federico Reyes Heróles denominado “Definición ética”; en este espacio transcribimos la respuesta que preparamos para el periódico Reforma, que no pudo ser publicada por su extensión:

Comentarios a las críticas y apreciaciones sobre los resultados de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad aparecidos en el artículo de Federico Reyes Heróles titulado “Definición ética” y respuesta a la solicitud de información de la columna ‘Juan Ciudadano’ del 20 de diciembre de 2010.

La práctica normal cuando se tienen dudas sobre alguna información que genera el INEGI es hacer una consulta. Desafortunadamente no se realizó una consulta previa al INEGI sobre las críticas y apreciaciones de los resultados de la ENSI-7 aparecidos en el artículo de Federico Reyes Heróles, que hubiera permitido aclarar oportunamente los cuestionamientos expresados. Tenemos tres tipos de observaciones a lo comentado en este artículo: en primer lugar de carácter estrictamente estadístico referente al análisis de diferencias aritméticas; segundo, respecto de los resultados históricos que se han presentado en las diversas ENSI; y tercero, diversos errores de apreciación que no corresponden con lo publicado por el INEGI respecto de la ENSI-7.

Primera: De carácter estrictamente estadístico referente al análisis de diferencias aritméticas. Algunos ejemplos.

Se señala en el artículo que según datos del INEGI, la criminalidad bajó en relación a los años anteriores. En principio, debe señalarse que no son datos del INEGI, sino información proveniente de las personas entrevistadas. Más allá de esta aclaración, si el autor se refiere al número de delitos o al número de delitos por cada 100 mil habitantes, la respuesta es no. No disminuyó la criminalidad, dado que el número de delitos no es significativamente diferente entre la encuesta realizada en el 2009 y la encuesta realizada en el 2010. Al analizar la información proveniente de encuestas es recomendable aplicar la técnica de “prueba de hipótesis” para determinar si las diferencias aritméticas que se observan son estadísticamente significativas o no.

Independientemente de lo anterior, si la criminalidad hubiera disminuido así se hubiera reportado; el INEGI reporta en todas las encuestas que realiza las estimaciones que se generan a partir de las respuestas de los entrevistados.

También se señala la incongruencia de reportar que hubo menos delitos y más denuncias. En principio, este resultado puede darse, es decir que efectivamente se hayan presentado menos delitos y más denuncias. No obstante, las variaciones entre 2008 y 2009 tanto para delitos como para delitos denunciados, no son estadísticamente significativas, por lo que carece de sentido hablar de incongruencias entre crecimientos y decrecimientos, ya que en realidad no existen.

Es importante señalar que la interpretación de los datos debe sujetarse a un análisis estadístico riguroso ya que las encuestas por muestreo están sujetas al error de generalizar los resultados de una muestra a la población. Este error es medible y, por lo tanto, es posible determinar si las diferencias de estimación de un fenómeno de una medición a otra, son significativas o simplemente se deben al error de muestreo. Por esta razón, como se mencionó anteriormente, es recomendable aplicar la técnica de “prueba de hipótesis” para determinar si las diferencias aritméticas que se observan son estadísticamente significativas o no.

Al igual que en el caso anterior, si éstas hubieran resultado estadísticamente significativas sería como resultado de las respuestas de los encuestados.

En el mismo sentido, es equivocado señalar que de la encuesta se deriva que Yucatán es más inseguro que Guerrero o Tamaulipas. Los resultados, por tratarse de una encuesta probabilística, tienen que ser analizados considerando que el valor real de la variable que se está estudiando se encuentra dentro de un intervalo de confianza cuyo rango varía en función del error estándar y un grado de confianza. Conforme el intervalo de confianza es más pequeño, la estimación es más precisa y viceversa. Para el caso de la variable de delitos en Yucatán, los valores contenidos en el intervalo de confianza se intersectan con los correspondientes a los intervalos de Tamaulipas y Guerrero por lo que no se puede afirmar categóricamente que existan diferencias. Nuevamente, las diferencias aritméticas que se observan en las estimaciones deben evaluarse mediante metodología estadística.

En síntesis, varias de las críticas que se hacen sobre los resultados de la encuesta carecen de sentido cuando la información se analiza con rigor estadístico.

Segunda: Respecto de los resultados históricos que se han presentado en las diversas ENSI.

El autor señala dos aspectos que le parecen cuestionables, el primero que Yucatán es más inseguro que Guerrero o Tamaulipas, y el segundo la reducción de la incidencia delictiva en Tamaulipas.

En el caso de Yucatán, desde las primeras semanas de levantamiento se observó un incremento significativo en la proporción de viviendas en las que se reportaba victimización, respecto de levantamientos previos, por lo que se realizó una verificación de la información captada, no encontrándose errores significativos. Los datos publicados corresponden a la información reportada por los encuestados.



Debe señalarse que no es la primera vez que un resultado así se presenta en este tipo de encuestas. Por ejemplo, en la ENSI - 5 en la que no participó el INEGI, Yucatán resultó con una incidencia delictiva igual que Sinaloa; y Guerrero y Michoacán con una incidencia menor a la de Guanajuato o Campeche.

Respecto al tema de Tamaulipas, el resultado es similar al observado en la ENSI levantada en el 2009. En el 2009 el ICESI decidió no publicar los resultados. En el caso del INEGI el criterio es diferente. El INEGI diseña y levanta sus encuestas conforme a los estándares metodológicos internacionales, procesa las respuestas que le proporcionan los entrevistados y pone a disposición de los usuarios estimaciones que resultan. Los resultados reflejan la opinión de los entrevistados. Así es el caso de Tamaulipas y el resto de las entidades federativas.

Debe señalarse nuevamente, que no es la primera vez que se presenta una situación así. Una situación similar se presentó en el caso de Sinaloa entre la ENSI - 5 y la 3, es decir entre 2004 y 2007. De acuerdo a los resultados publicados por el ICESI hubo una reducción de 70 % en la incidencia delictiva en Sinaloa entre estas dos fechas. No es el único caso, en Durango, por ejemplo, la incidencia delictiva bajó 56 % y en Morelos 27 % entre ambos periodos.

Muchos casos más pueden señalarse. Por ejemplo, entre la ENSI - 3 y la ENSI - 4 pueden compararse los resultados para algunas zonas urbanas entre 2004 y 2005. De los resultados publicados por el ICESI se infiere que la incidencia delictiva bajó 45 % en Cuernavaca y 57 % en Culiacán entre un año y otro.

La pregunta que debe hacerse es si han estado mal las encuestas nacionales sobre inseguridad que se han levantado en el país, las que han sido levantadas por el INEGI y las que no han sido levantadas por el INEGI; la respuesta es no. Hay que tomar en cuenta que en este tipo de ejercicios estadísticos, para una confianza fijada, el error en la estimación depende del tamaño de muestra y de la variación de la característica en estudio, de tal manera que a nivel nacional las estimaciones obtenidas de la encuesta son bastante exactas. A medida que se incrementa el nivel de desagregación al que se pretende obtener resultados, el tamaño de muestra se distribuye entre los dominios de interés y por tanto el error de las estimaciones se incrementa en cada uno en particular; por tal motivo, si se desagrega a nivel entidad, para características poco frecuentes, se obtienen errores más grandes y por tanto intervalos de confianza muy amplios.

En el mismo artículo el autor señala que el INEGI no considero alarmante que en Tamaulipas hubo un 33.5 % de no respuesta. Revisando la ENSI - 5 que se levantó en el 2008 y que no levantó el INEGI, se observa que la tasa de no respuesta fue mayor, pues ascendió al 36 % y las entrevistas completas fueron 819. En el caso de la ENSI 7 que se está comentando la no respuesta, como ya se mencionó, fue de 33.5 % y el número de entrevistas completas de 2326, tres veces más que en la ENSI - 5, solo que ahora es criticable y en aquel momento no le mereció ningún comentario al autor.



En síntesis, quedaría la impresión de que las críticas únicamente se dirigen a la ENSI-7 cuando hay situaciones similares o que llaman más la atención que se presentaron en otras ENSI en las que no hubo críticas o autocríticas de ningún tipo, lo cual sin duda resulta un tanto extraño.

Tercera: Diversos errores de apreciación que no corresponden con lo publicado por el INEGI respecto de la ENSI-7.

El autor señala que en Tamaulipas 70% de las viviendas se encontraba en condición de área insegura, lo cual es una interpretación errónea. Derivado de los problemas que se viven diariamente en campo, el INEGI implementó el código “área insegura” para que los entrevistadores puedan clasificar en éste las áreas en las que tienen dificultad para entrar y que las viviendas ubicadas en estas zonas no queden en la misma bolsa que las viviendas de las cuales no se obtiene información por otra situación (negativa, ausencia de ocupantes, entre otras). La información está documentada y se corrobora semana a semana de levantamiento como un procedimiento estándar del INEGI.

A nivel nacional, 172 viviendas del total de la muestra del INEGI son catalogadas como no respuesta por estar en áreas inseguras, esto representa 0.23% de la muestra total. En el caso particular de Tamaulipas, al término del operativo, 121 viviendas fueron catalogadas como no respuesta por estar en áreas inseguras, esto es 3.46% de las 3,500 viviendas de la muestra seleccionada para ese Estado, lo cual no tiene nada que ver con el 70 % afirmado por el autor.

Efectivamente, del total de no respuesta por estar en áreas inseguras, el 70 % está en Tamaulipas, lo cual es muy diferente. La afirmación del autor equivaldría a decir que por el hecho de que el 70 % de las entradas a internet del periódico Reforma provienen de la ciudad de México, el 70 % de los habitantes de la ciudad de México consulta el Reforma por internet.

En el artículo se señala que en Tamaulipas y en Chihuahua se registró un altísimo porcentaje de viviendas deshabitadas, 27.5 y 45 % respectivamente, lo cual también representa una lectura errónea. A nivel nacional, al cierre del operativo de la ENSI - 7, se detectaron en campo 5,889 viviendas deshabitadas (8.03%), de las cuales 572 se ubicaron en Chihuahua que contó con un muestra de 4,873 viviendas seleccionadas por lo que su porcentaje de deshabitación alcanzó un 11.7%, mientras que en Tamaulipas con una muestra de 3 500, las viviendas deshabitadas suman 323 que corresponde a un 9.23%. Se trata de cifras muy diferentes a las señaladas por el autor.

En su argumentación, el autor señala que el INEGI no hacía este tipo de encuestas, lo cual no es del todo cierto. No hay institución con mayor experiencia en este tipo de encuestas que el INEGI. La experiencia del INEGI en la generación de información de inseguridad, delincuencia y crimen data de principios de los noventa. En 1989, 1990 y 1992 llevó a cabo encuestas sobre incidencia delictiva en el Distrito Federal. De igual manera, en 1992, 1993 y 1997 se llevaron a cabo



encuestas similares para las ciudades de Monterrey, Oaxaca, Veracruz, Cuernavaca, Ciudad Juárez y el área metropolitana de la Ciudad de México.

Aprovechando sus experiencias previas, el INEGI levantó la Encuesta Nacional sobre la Percepción de la Seguridad Pública en 36 áreas metropolitanas durante 2004. En 2005 participó con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) en el diseño del cuestionario de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI - 3) de ese año, lo que permitió crear un instrumento con mejor claridad en las preguntas, mayor fluidez, secuencia y congruencia, así como facilidad en su manejo en el campo. A partir de ello, el INEGI levantó la ENSI - 3 y también fue responsable de levantar la información de la ENSI - 6 en 2009. La ENSI - 7 levantada en el 2010 complementa la experiencia del INEGI en la generación de este tipo de información.

El autor señala que las encuestas de victimización recogen hechos no percepciones, pero que en el INEGI se consideró que esa era una mala idea y por ello introdujo otras preguntas. No es correcta la apreciación. Dentro de los objetivos de las Encuestas Nacionales sobre Inseguridad, aparte de captar la victimización que es el corazón de la encuesta, ha estado presente en las versiones anteriores el conocer la percepción de los ciudadanos en torno a la seguridad pública y para esta última edición de la encuesta, se incorporó la percepción respecto al desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, tal como el INEGI se comprometió en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Para el INEGI, como órgano autónomo del Estado Mexicano, es fundamental que la academia, las organizaciones sociales, los ciudadanos y las propias instituciones responsables de atender estas materias cuenten con información que permita evaluar las políticas y programas públicos, sus resultados y la propia actuación de dichas instituciones.

En el mismo artículo, el autor señala que en el INEGI se pensó que la fórmula internacional para captar la cifra negra no era buena y la cambiaron, lo cual es falso. El reactivo a que se refiere el autor no se modificó y se encuentra en la Sección III Víctimas de Delitos en el Hogar y corresponde a la pregunta 3.1 'Durante 2009, ¿alguna persona que vivía o vive en el hogar fue víctima de algún delito en este estado?'. La pregunta se realizó igual que en la encuesta anterior a ésta (ENSI-6). Esta pregunta se hace al primer informante, es decir cualquier miembro del hogar mayor de 18 años que conoce la información de todos los residentes de la vivienda.

De igual manera, debe señalarse como falso que el INEGI no hubiera publicado parte de la encuesta, ya que el INEGI se apegó a los más altos estándares internacionales de transparencia y pone a disposición del público la metodología, el reporte de campo y las bases de datos correspondientes. En el caso de la ENSI -7, levantada en el año 2010, estas bases de datos se encuentran en su página de internet donde pueden ser consultadas por cualquier persona o Institución. El material incluido en el portal de internet del INEGI incluye todas las preguntas de la encuesta, no se omitió ningún reactivo.



En relación al comentario de que se clasificaron los homicidios, efectivamente es un error que se derivó de tres casos en que el entrevistador en turno captó un delito que no correspondía a la persona elegida sino al hogar, uno que hace referencia a un asesinato, otro describe el homicidio de su esposo y el último a un intento de homicidio. Cabe señalar que corresponden a un 0.03 por ciento de los delitos clasificados.

En síntesis, los comentarios al artículo serían los siguientes: primero, algunas críticas que se hacen sobre los resultados de la encuesta carecen de sentido cuando la información se analiza con rigor estadístico; segundo, en otras, quedaría la impresión de que las críticas únicamente se dirigen a la ENSI-7 cuando hay situaciones similares o que llaman más la atención que se presentaron en otras ENSI en las que no hubo críticas o autocríticas de ningún tipo; y tercero, el artículo contiene errores difíciles de explicar en un editorialista tan serio como el autor.

No obstante lo anterior el INEGI seguirá como siempre, atento a las críticas que le permitan mejorar los instrumentos de captación, más aún tratándose de aspectos tan sensibles para la sociedad como la inseguridad.
